

Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia

Marc Gavalda*

Las recientes movilizaciones en Bolivia conocidas como la *Guerra del Gas* transportaron el rechazo al saqueo transnacional de recursos naturales a las cabeceras de los principales medios de prensa internacional. Entre septiembre y octubre del 2003, un bloqueo de rutas iniciado en la depauperada ciudad de El Alto logró movilizar a miles de indígenas y campesinos de la mayoría de departamentos del país con un reclamo justo: la paralización del proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y la recuperación de los hidrocarburos como recurso nacional. Como es habitual en los mass-media internacionales, la noticia salió a la superficie cuando «la sangre del pueblo se derramaba en las calles». 80 muertos y cientos de heridos, muchos de ellos de impacto de bala, fueron el precio a la destitución y huida a Miami del *gringo* Goni, el cual ascendió al poder con un ajustado 20% de los votos de un 45% de la población que acudió a las urnas. Pero tras las masacres del gas, algunos actores del conflicto han sabido esconder su responsabilidad en una cortina de amenazas de desinversión. Repsol-YPF, socia mayoritaria del Consorcio Pacific LNG es una de ellas.

10 AÑOS DE REPSOL EN BOLIVIA

En *Ecología Política* N° 15, describía lo que acababa de ser la entrada de Repsol en el Bloque Sécure, primer contrato de la empresa en el país. Desde entonces, Repsol se ha apoderado de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas,¹ la mayor parte en suelos tropicales. La Ley de Hidrocarburos permite hacer en estos terrenos lo que la empresa estime necesario para sus proyectos extractivos ¿Cómo llegó una empresa a conquistar tanto territorio en sólo una década?

En 1994 conseguía su primer contrato de riesgo compartido. Un millón de hectáreas entre el Chapare y Beni. En 1998 se adjudicaba cuatro bloques más en el Chaco y al interior del Parque Nacional Madidi y la Reserva Biológica Pilon Lajas.

En 1999, se concretaba un movimiento bursátil preparado en los años más prolijos del *Menemato*. Repsol lanzaba una OPA en la Bolsa de Nueva York a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. A pesar de la dilatada campaña de hundimiento económico (corrupción) y social (decían «YPF es la única petrolera del mundo que produce pérdidas»), Menem entregó a Repsol una compañía con enormes reservas no sólo en Argentina sino en países donde YPF actuaba desde años como transnacional.

En Bolivia, YPF ya trabajaba desde los noventa a través de una de su filial Maxus en 6 bloques con un total de 2 millones de hectáreas. El bloque Mamoré, situado en el epicentro de la región cocalera del Chapare había resultado el más productivo en petróleo.² Otro bloque, el Bloque Capipendi, será el desencadenante años más tarde de la *Guerra del Gas*.

Por otro lado, YPF había tomado control de un pedazo de la descuartizada YPFB, empresa estatal boliviana de hidro-

* Participa en el Observatorio Transnacional de Barcelona www.ojotransnacional.org.

¹ Datos de YPFB 1998 y 2000 citados en M. Gavalda, M. Gandarilla, H. Rodríguez, B. Rioja, Repsol en Bolivia, un acercamiento de los impactos de Repsol en el Beni, Chapare y Chaco, *Consultoría para Intermón-Oxfam, Cochabamba, 2002*.

² A pesar de ello, sus planes expansivos fueron frenados por la negativa de la Universidad Mayor de San Simón de permitir la prospección sísmica en el interior de un fundo universitario de 6.000 hectáreas de bosque tropical. Ver: M. Gavalda, Las Manchas del petróleo boliviano, *FOBOMADE, OLCA, Bolivia 1999*.

carburos que fue *capitalizada* en un novedoso sistema de privatización creado por Goni en su primera legislatura (1993-1997). En un inicio, YPF se asoció a las también argentinas Pluspetrol y Pérez Companc para quedarse con Andina S.A.: 2 millones de hectáreas de Chaco repartidos en 9 bloques petroleros. Cuando Repsol se queda con YPF, prepara un intercambio de incentivos con Pérez Companc y Pluspetrol para quedarse con el timón de Andina.

Otro caballo de Troya es Pluspetrol. Repsol controlaba en el año 2000 el 45% de las acciones de esta empresa, dueña de otros 6 bloques con un total de 800.000 hectáreas. En 1999, el Pozo Madrejones operado por Pluspetrol en la fronteriza población de Yacuiba, ardió impunemente durante tres meses obligando a desalojar 8 familias.

En los últimos años, la creciente organización de las poblaciones indígenas unido a la aceleración de los proyectos productivos con sus impactos asociados (apertura de caminos, deforestación, vertidos, prostitución) han generado un sinfín de conflictos ambientales en el interior de las áreas donde Repsol opera. En este artículo me limitaré a citar los proyectos gasíferos en Bolivia.³

Dos gasoductos paralelos

Bolivia flota en bolsas de gas. Es algo que Repsol sabe desde sus adquisiciones en el Chaco, donde tiene en su poder las reservas probadas más importantes del país.

El Gasoducto Yacuiba Río Grande, fue rebautizado de su nombre original(Yabog-II) para no crear confusiones con la competencia. Se trata ni más ni menos que la construcción de un gasoducto paralelo al ya existente Gasoducto Yabog que conecta Yacuiba con la estación de Río Grande, donde se empalma con el Gasoducto Bolivia-Brasil. El motivo de añadir otro gasoducto al ya existente es puramente mercantil. El Gasoducto Yabog-I pertenece al consorcio Transredes (Enron-Shell) y esta empresa les impondría una tarifa por el uso del gasoducto. Este dato motivó a las empresas propietarias de los campos San Alberto y San Antonio a construir su propio ducto, aunque ello suponga la destrucción de más de 431 kilómetros de bosques secos tropicales. Este monstruoso gasoducto, de capacidad superior al Gasoducto Bolivia-Brasil, el cual fue considera-

do como el *Proyecto del siglo*, tiene un diámetro de 32 pulgadas una capacidad de transporte de 22,7 millones de metros cúbicos diarios.

Sus dueños, agrupados en el Consorcio Transierra S.A, son los titulares de los campos San Alberto y San Antonio, o sea Petrobras, Total y Andina (Repsol-YPF). El consorcio Transierra S.A. pretende cubrir el 70% de la demanda de gas a este país.

Las poblaciones indígenas afectadas por el trazado del nuevo ducto se opusieron enérgicamente al proyecto, así como también los comunarios de la región del Chaco, lo que generó «una serie de problemas en la región del Chaco». ⁴ El Pueblo Indígena Wenhayek presentó ante la Superintendencia de Hidrocarburos su oposición a la construcción del gasoducto Yacuiba-Río Grande (Gasyrg). ⁵ Los Wenhayek argumentan que el ducto atravesará su territorio, al igual que las tierras que son habitadas por el Pueblo Guaraní, que también presentó su oposición.

Pero la Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia, organismo creado y financiado por el Banco Mundial y las propias empresas petroleras, declaró improcedentes las objeciones de la empresa Transredes, del Pueblo Wenhayek y de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Con esta decisión, el consorcio Transierra arrancó el operativo de construcción del gasoducto entre Yacuiba y Río Grande (Proyecto GASYRG).

Según la Superintendencia «La Licencia Ambiental otorgada a Transierra, descalifica la aseveración de la Asamblea del Pueblo Guaraní y de los weenhayek, referida a la inexistencia de una evaluación de impacto ambiental del gasoducto, y consecuentemente la legalidad de la licencia». ⁶ De nuevo los Estudios de Impacto Ambiental, procedimientos inconsultos en los que una consultoría recoge datos de todo lado para recopilar-

³ Más información sobre las actividades petrolíferas de Repsol en Bolivia y otros países en M. Gavaldà, La Recolonización, Ed. Icaria, Barcelona, 2003.

⁴ Declaraciones de la Viceministra de Medio Ambiente, Neisa Roca. Presencia, La Paz, 06/06/2001.

⁵ El Deber, Indígenas se oponen a la construcción de ducto, La Paz, 06/10/2001

⁶ El Deber, La «Super»encamina la construcción del Gasyrg, Santa Cruz, 30/11/2001.

los en un documento de 200 páginas sin sentido, sirven para justificar la destrucción ambiental y los atropellos de los grandes proyectos a las poblaciones.

La noticia tampoco causó mayor sorpresa en la sede del gobierno. En círculos políticos se dijo ayer que estaba previsto, por una cuestión de emergencia nacional para cumplir obligaciones asumidas por el Estado, un decreto para autorizar la construcción del ducto si el litigio se extendía en la Superintendencia.

Gas licuado, dinero líquido

Para la exportación de gas natural a México y Estados Unidos, en el mes de junio del 2001, se conformó el consorcio PACIFIC LNG constituido por las transnacionales petroleras Repsol-YPF, British Gas (BG) y British Petroleum (BP). Estas tres transnacionales participan del negocio debido a que son socias y operan el bloque Caipipendi, en el departamento de Tarija.

Estas empresas son socias del campo Margarita que se encuentra dentro del Bloque Caipipendi en los siguientes porcentajes: Maxus (Repsol YPF) 37,5%, British Gas con 37,5% y Unión Texas de Bolivia con 25%. La empresa operadora de este campo es la empresa Repsol a través de la empresa Maxus Bolivia.

Las empresas miembros del consorcio PACIFIC LNG son adjudicatarias del mayor yacimiento hidrocarbúfero en Bolivia, el campo Margarita que posee 13,42 trillones de pies cúbicos de gas natural y 303.48 millones de barriles de petróleo.⁷

La historia del campo Margarita comienza con el descubrimiento del pozo Margarita X-I en 1998, a partir de esa fecha se realizaron una serie de ensayos de producción y nuevas perforaciones.

El proyecto del consorcio PACIFIC LNG consiste en construir un gasoducto entre el campo Margarita que se encuentra en Tarija Bolivia y el Puerto de Mejillones en Chile,

licuificar diariamente 30 millones de metros cúbicos de gas sometándolo a altas presiones para transportarlo en un tren de barcos diarios a las costas de México, donde será de nuevo gasificado y transportado a California por medio de un gasoducto. La empresa Sempra Energy se encargaría en este momento de quemar el combustible en plantas térmicas para convertir el gas en kilowatios.

El consorcio estima que en total el proyecto comprometería una inversión de aproximadamente 5.000 a 7.000 millones de dólares y que podría culminarse a mediados del año 2005.

Repsol ha comprometido que encontrará mercado en México para el gas natural boliviano, han asegurado concretamente el de Monterrey, además que anuncia por la prensa española su compromiso de invertir mil millones de dólares en el negocio⁸. Es obvio que las grandes ganancias que promete el negocio empujan a esta empresa a asegurar su participación en el proyecto.

Da igual Chile que Perú

Los medios de prensa internacionales, bien supieron salir en defensa del Proyecto atribuyendo la raíz del conflicto al resentimiento boliviano por perder la costa de Antofagasta hace un siglo y medio. No es cierto.

Después que la prensa boliviana y los personeros de gobierno ratificasen a la opinión pública que la decisión acerca del puerto para la exportación de gas se la tomaría dentro de Bolivia y velando por sus intereses, las empresas del consorcio ratificaron su intención de sacar el gas boliviano por el puerto chileno de Mejillones y no considerar otras opciones.

Así lo confirmó el gerente general de la empresa española en Bolivia, José María Moreno, quien señaló que técnicamente «Mejillones es la opción más racional». El problema de la elección son los costos, dijo Moreno. Y los fondos para llevar adelante el proyecto no los pondrán los estados, sino las petroleras.⁹

Según los estudios de factibilidad y rentabilidad del proyecto realizados por el consorcio el gasoducto a construirse entre el Campo Margarita en Tarija y el puerto Mejillones en Chile tendría una distancia de 780 kilómetros y costaría alrededor de

⁷ Estas cifras corresponden a la certificación de reservas al 1 de enero del 2001, realizada por la consultora de Goldyer and Mac Naughton

⁸ La Vanguardia 8 de noviembre de 2001.

⁹ La Prensa 30 de noviembre de 2001.

mil millones de dólares, en tanto que un gasoducto entre el puerto peruano de Ilo alcanzaría los 950 kilómetros.

El consorcio estima que el precio del proyecto subiría entre 150 y 200 millones de dólares por cada 80 kilómetros de tubería adicional.

No valió de nada la visita del presidente peruano Toledo a Bolivia, ni la propuesta que planteo el desarrollo del un polo petroquímico binacional (Bolivia-Perú), para exportar no sólo materia prima, sino productos con valor agregado. Porque a las petroleras involucradas con el negocio les resulta mas rentable a sus costos la instalación de la planta de licuefacción del gas natural en Chile y la exportación de este recurso natural como materia prima.

En las actuales circunstancias, definidas por las reformas en el sector petrolero boliviano, la participación del Estado dentro proyecto PACIFIC LNG y los beneficios que de él pueden obtener son pocos e insuficientes.

Analizando la propuesta que el consorcio tiene para los precios en boca de pozo (de 0,60 centavos de dólar por millar de pies cúbicos de gas natural en explotarse), la participación del Estado boliviano se reduciría aún más, debido a que de los 60 centavos de dólar que llegaría a costar el millar de pies cúbicos tan solo 10 centavos de dólar se quedarían en Bolivia en concepto de regalías. Lo que en los hechos deja de ser una venta para convertirse en un regalo y subvención a los mercados de Norteamérica, donde el precio del millar de pies cúbicos de gas natural oscila entre los 4 y los 6 dólares.

De concertarse una venta diaria de 30 millones de metros cúbicos al día de gas natural —ingresos anuales para Bolivia por el 18% sumarían en total 41.745.780 US\$ al año, diez veces menos de los que hasta 1993 entregó la empresa YPFB al Estado boliviano.

LAS CUATRO TRAMPAS DE GONI

Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario de origen boliviano pero criado y educado en Estados Unidos, hizo la primera fortuna en las dragas de Teoponte, donde los ríos auríferos sedimentaban dinero en bruto. EL negocio minero floreció, compró minas y exportó minerales gratuitamente a través del siste-

ma ferroviario boliviano hasta que éste fue arruinado por completo. Aprovechando sus lazos familiares con antiguos dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) llegó al poder en 1993 tras una millonaria campaña electoral. Cuatro escasos años de legislatura bastaron para convertir Bolivia en pasto de transnacionales. El modelo del Nuevo Ajuste Estructural que tanto pregonaba (y financiaba) el Banco Mundial resultó una estafa del tamaño del Illimani.

Primera trampa: la capitalización

Capitalización: Bajo la fórmula de «1+1=2» hizo creer a la opinión pública que Bolivia ganaría socios inversores en todas las empresas públicas. Fue una estafa: las transnacionales se repartieron los recursos y servicios sólo con la promesa de invertir el valor patrimonial de la empresa privatizada. Repartieron empresas como quien reparte galletas de la Cruz Roja. En los pasillos aguardaban las multinacionales al acecho. Antes de su capitalización Repsol aportaba el 50% del Tesoro General de la Nación. Su patrimonio estaba valorado en más de mil millones de dólares, pero en los años que precedieron la capitalización se hundió la empresa a propósito, desinvirtiendo en los campos más productivos y transfiriendo todas las ganancias al Estado. Se estaba haciendo la eutanasia a una empresa moribunda, haciendo creer al pueblo que sin inversión extranjera ya no levantaría cabeza. Se dividió la empresa en cuatro y la repartieron entre Enron-Shell (Transredes S.A.), BP-Amoco (Chaco S.A.) y un consorcio argentino (Andina S.A.) En el caso de Andina S.A. las empresas argentinas sólo debían invertir 268 millones de dólares en ocho años, cuando las reservas provadas indicaban cantidades desproporcionadamente superiores.

Segunda trampa: la reclasificación de los campos

Otra medida ventajosa aprobada a favor de las transnacionales está referida a la reclasificación de campos. Esta medida que se incorpora como un incentivo a la inversión en el sector se dispuso con las modificaciones en la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada el 30 de abril de 1996. Dicha Ley y el Decreto Supremo N° 24419, que aprueba los reglamentos de la Ley de

Hidrocarburos, disponen la distinción entre campos nuevos y campos existentes que son: campos existentes, son los reservorios que están en producción a la fecha de la Ley de Hidrocarburos, certificadas al 30 abril de 1996 por empresas especializadas. Campos nuevos son todos los hidrocarburos no contenidos en la definición de campos existentes, y que sean descubiertos luego de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos.

En los hechos esta distinción ha rebajado el impuesto a las transnacionales; de 50% que pagaba YPF, a 18% para los hidrocarburos que se explotan en los denominados campos «nuevos». Se ha evidenciado que muchos de los campos denominados nuevos estaban ya descubiertos o en producción, antes de la promulgación de esta ley. La trampa de Goni, rebaja entonces un 32% los impuestos por regalías a 20 campos productivos ya existentes, perdiendo el país cerca de 500 millones de dólares anuales.¹⁰

¿Se benefició Repsol-YPF de esta jugada? Impepinablemente, véase que pasó con los prolíficos campos de San Antonio y San Alberto.

Tanto los campos de San Alberto como los de San Antonio son operados por un consorcio entre Petrobras, Total y Andina SA, que acapara el 50% de las acciones. Andina SA pertenece a Repsol-YPF. Estos dos campos proporcionarán el 70 % del gas natural comprometido a Brasil: 22 de los 30 millones de metros cúbicos establecidos en el contrato de compraventa suscrito entre YPF y Petrobras.¹¹ Cuando el 9 de enero de 2001 se empezó a fluir el gas de San Alberto hacia

Brasil, en un volumen de 1,5 millones de metros cúbicos diarios (con la perspectiva de incrementarse a 13,2 millones en 2002) toda la prensa nacional agradeció los 140 millones de dólares de regalías anuales, correspondientes al 18% de los beneficios.

Pero vale la pena despejar inexactitudes sobre los supuestos nuevos descubrimientos. El Campo San Alberto fue descubierto por la antigua empresa estatal YPF en 1996, en que se perforó los dos primeros pozos positivos, con una profundidad de 10 mil metros y un costo de 11.774.000 dólares. El Pozo San Antonio, es más antiguo y fue descubierto en 1994 por Tesoro Bolivian Petroleum en operación conjunta con YPF, con un costo de 2.139.000 dólares.¹²

El campo San Alberto posiblemente ha sido para REPSOL-YPF y sus socias el negocio más rentable de la historia de todos los tiempos. Treinta años de exploración y perforación de la empresa pública para entregarlo después a las compañías extranjeras a precio de gallina muerta. Desde octubre de 1996 a la actualidad, estas empresas dicen haber invertido 200 millones de dólares en perforar tres pozos sólo 46 metros más de la profundidad de 4.564 metros alcanzados por YPF. Esto les permitió apoderarse de una de las mayores reservas de gas del continente americano, cuantificadas por un valor de 5,4 billones de dólares.¹³

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico,¹⁴ lo que se ha hecho con San Alberto significa que Bolivia dejará de percibir 1.900 millones de dólares, que es la diferencia entre cobrar impuestos y regalías por el 50% contra sólo el 18% de haberlo calificado como yacimiento nuevo.

El campo Margarita ha sido el desencadenante de la Guerra del Gas. Ubicado en el departamento de Tarija, fue descubierto por YPF a mediados de los noventa y se tenía un plan Estratégico para ir provocando los yacimientos profundos, a medida que el mercado de gas lo demandara.¹⁵ Ahora el Campo Margarita pertenece a un consorcio entre Maxus, empresa subsidiaria de Repsol-YPF, British Gas y Unión Texas de Bolivia. Este campo se constituye en el mayor yacimiento hidrocarburífero de Bolivia, con una reserva de 13,42 pies cúbicos de gas natural y 303,48 millones de barriles de petróleo.¹⁶

Éste es otro caso de pérdidas millonarias para Bolivia. Los *redescubridores* se quedaron con el mayor tesoro del país, des-

¹⁰ Dr. René Rocabado Alcocer y Cite. Gildo Angulo. Revista CDAN. Nº 28. 2000.

¹¹ CEDIB, Inauguración de planta de San Alberto aviva polémica en torno a la capitalización, Revista 30 días, Cochabamba, enero 2001.

¹² Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas Económicas de la Actividad Petrolera, La Paz, noviembre 1997.

¹³ Hugo del Granado, San Alberto y la capitalización, Los Tiempos. Cochabamba, 24/01/2001.

¹⁴ Declaraciones del ministro de Desarrollo Económico, Carlos Saavedra. La Prensa, 12/01/2001.

¹⁵ CEDIB, Margarita, mayor reservorio de gas en manos de sus redescubridores, Revista 30 días, Cochabamba, mayo 2001.

¹⁶ Según Certificación de reservas al 1 de enero 2001, realizada por la consultor De Goldyer&Mac Naughton. La Prensa, Margarita, la mayor reserva de gas, La Paz, 22/05/2001.

cubierto por los bolivianos y pagarán sólo un miserable 18% de regalías.

Tercera trampa: Gasoductos y avionetas de Enron

Bolivia expulsa el gas a chorros. En realidad el polemizado proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, representa un tercio de lo que ya está exportando Bolivia a Brasil por otros ductos. El interés carioca por el gas boliviano se remonta a varias décadas. En 1974, en plena dictadura banzerista, Brasil consiguió un compromiso de Bolivia para la venta de 240 millones de metros cúbicos al día. Afortunadamente, esta galáctica cifra nunca se pudo llevar a cabo. Sin embargo, intermitentes reuniones bilaterales en las décadas siguientes se concretaron en el contrato de venta de gas al Brasil durante el mandato de Goni Sánchez de Lozada. Preocupados por la lentitud de los avances, Brasil había ofrecido a Bolivia construir el Gasoducto y dar *llave en mano* a Bolivia. La insistencia era comprensible. Sao Paulo, la ciudad más grande e industrial del MERCOSUR necesitaba combustible barato que Bolivia podía ofrecer.

Cuando se anunció la construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil la prensa lo anunciaba como el Proyecto definitivo que iba a sacar a Bolivia de la pobreza, revertiría la balanza comercial con Brasil y aumentaría en un punto el PIB anual boliviano. Ocho años después ¿ Se cumplieron las prespectivas? Lo cierto es que las empresas del Gasoducto han encontrado el negocio del siglo y no tienen escrúpulos en atopellar comunidades y ecosistemas para sacar de Bolivia las reservas de gas cuanto antes.

La magnitud del Gasoducto Bolivia Brasil, financiado por el Banco Mundial y el BID podía haber convertido a Bolivia en el Kuwait de América pero no fue así. Algunas claves para entender el pinchazo:

1. Bolivia ya no participaba con la empresa estatal YPFB en el proyecto, porque ésta había sido *capitalizada* el año anterior. Toda la unidad de transporte y comercialización de YPFB se denominó Transredes y se puso en subasta. Enron y Shell se adjudicaron el pastel a cambio de una promesa de inversión de 263,5 millones de dólares. Según la Ley de

Capitalización, los bolivianos conservan el 50% de las acciones de Transredes a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los beneficios del gasoducto ya no irían a mitades con Brasil, sino la mitad para Brasil y la otra mitad repartida entre Enron, Shell y las AFPs, eso es, un cuarto para los bolivianos. Peor aún:

2. El día de firmar el contrato, el Presidente de la República de Bolivia no llegó a la ciudad fronteriza de Puerto Suarez en avión oficial. Para sorpresa de los asistentes, Goni aterrizó con la avioneta particular de Enron y modificó el contrato a última hora. Transredes no tendría el 50 % de los beneficios sino que se asociaría a su vez con Enron quedando el reparto así: una mitad para Brasil, 25% para Enron y 12,5% ambos Shell y las Administradoras de Fondos de Pensiones de Bolivia.

El negocio del siglo, el protuberante gasoducto que escupiría a un ritmo de 30 millones de metros cúbicos de gas diarios al Brasil durante las próximas décadas, reportará a Bolivia algo más que una migaja. Además, el sistema de AFP gestionado en su mayoría por la banca española (BBVA y BSCH) reparte las pensiones a los mayores de 60 años, cuando la esperanza de vida de Bolivia es de 58.¹⁷

Biopiratas en el Gasoducto a Cuiabá

Al año siguiente, apareció en escena el Gasoducto Cuiabá. Este nuevo gasoducto servirá para suministrar gas barato boliviano a la sobredimensionada planta termoeléctrica que construye la compañía Enron en la ciudad de Cuiabá. Con este proyecto la que fue la empresa de gas natural más grande del mundo, suministrará electricidad a un millón de consumidores brasileños y a las poblaciones fronterizas de Bolivia, que comprarán su propio gas convertido en kilowatios. En realidad, lo que buscaba Enron con esta obra es liberarse de Petrobras (socio del Gasoducto Bolivia-Brasil) para disponer de su propio tubo que

¹⁷ Para más información ver Suarez, Crespo, Guardia, Problemática Socio-ambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil, *Probioma y Olca*, SantaCruz, septiembre 2000. Pedidos: probioma@rolde.scz.entelnet.bo y olca@rdc.cl

alimiente su central térmica. El Proyecto requiere de una inversión de 570 millones de dólares, de los que aproximadamente la mitad son para enterrar los 626 km de gasoducto. Como muchas otras obras de Enron en el mundo, recibió el financiamiento de OPIC, aunque sus estatutos lo prohibían. El trayecto del Gasoducto a Cuiabá se podía haber diseñado con una lógica de evitar las zonas más vulnerables, pero se optó por la solución barata, o sea una línea recta, de 30 metros de ancho destruyendo todo a su paso. El trazado del gasoducto atravesaba el Bosque Seco Chiquitano, una mancha de bosque virgen de 100 km de diámetro, calificado entre los bosques secos con mayor riqueza de especies y endemismos del planeta. Todo esto no se decía en el deficiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el gobierno, que consideraba el Bosque Chiquitano como si fuera una parte del pantanal.¹⁸ Este hecho motivó que tanto las poblaciones locales como un entramado de organizaciones sociales bolivianas e internacionales se opusieran al trazado del proyecto. Esta oposición llegó incluso al congreso norteamericano donde se de-

mostró la incompatibilidad del proyecto con los estatutos del Banco OPIC, que prohíbe el financiamiento de obras que supongan una intervención directa a los bosques primarios tropicales. Entonces OPIC encargó otro estudio complementario que determinó que «el Bosque Seco Chiquitano puede ser el área más grande de bosque seco remanente relativamente poco afectado en el Neotrópico, sino en el mundo entero».¹⁹ Si la OPIC retiraba el préstamo, Enron y Shell lo tendrían más difícil para llevar a cabo el proyecto, pero a última hora ENRON se sacó de la manga un acuerdo con 5 organizaciones para la ejecución de un Programa de Conservación del Bosque Seco Chiquitano de 20 millones de dólares. Estas organizaciones, tres de ellas extranjeras, negociaron en nombre de los bolivianos la destrucción de un ecosistema único a cambio de convertirse en un poder económico regional más fuerte que el Estado.²⁰ En cambio, las 37 comunidades de indígenas chiquitanos y ayoreos afectadas directamente por la construcción del gasoducto, recibieron después de dos años de movilizaciones y negociaciones un Plan de Desarrollo Indígena presupuestado en casi 2 millones de dólares.²¹ Las 5 instituciones del negociado con Enron, sacaron diez veces más sólo con una firma. Sus primeras actuaciones fueron constituirse en Fundación para tener más movilidad financiera y proponer la creación de áreas de conservación privadas. Se cerraba el ciclo. Comprando tierras a algunos particulares, la Fundación retornaría los favores a la oligarquía gobernante que impulsó el gasoducto incluso a costa de redactar nuevas leyes para evitar la inconstitucionalidad del proyecto ya que para legalizar la propiedad privada en la frontera, el gobierno aprobó la Ley Corazón, que abre la frontera por ocho puntos donde se extenderán los corredores energéticos de exportación.

Pero también había otros intereses para Estados Unidos. En mayo del 2000, la Fundación de Amigos de la Naturaleza (una de las beneficiadas con los 20 millones de Enron), hace una solicitud a la Dirección General de Biodiversidad para extraer variedades de maní silvestre en la chiquitanía debido a la amenaza de desaparición que supone la construcción del gasoducto. En la solicitud se detallaba el convenio que tenían la Fundación con el Ministerio de Agricultura de estados Unidos para practicar la conservación *ex situ* de las plantas de maní. La Dirección General de Biodiversidad, aceptó esta flagrante

¹⁸ *Entrix-PCA, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Gasoducto a Cuiabá, Tramo Boliviano, Santa cruz, 1998.*

¹⁹ *Estudio Ambiental Suplementario Independiente del Gasoducto a Cuiabá citado en M. Gavalda, Organización Indígena Chiquitana-CEADES, Guía para la vigilancia social de la industria extractiva en territorios indígenas, Santa Cruz, Bolivia, 2001. Pedidos: ceades@roble.scz.entelnet.bo.*

²⁰ *El Programa de Conservación del Bosque Seco Chiquitano fue firmado por las instituciones norteamericanas World Wildlife Found (WWF; la del osito panda), World Conservation Society y el Jardín Botánico de Missouri (una de los más famosos biopiratas del mundo. Ver: www.rafi.org) y las Fundaciones bolivianas Fundación de Amigos de la Naturaleza y Fundación del Museo Noel Kempf Mercado. WWF se retiró a los pocos meses por la presión internacional. Fuente: Patricia Molina, El Proyecto Cuiabá, cómo comprar conservacionistas, FOBOMADE, La Paz, 1999. Contacto: fobomade@mail.megalink.com,*

²¹ *El Plan de Desarrollo Indígena (PDI) tiene un presupuesto de 1.971.000 \$ y fue considerado inicialmente un logro por las organizaciones indígenas por tener un control en las decisiones ejecutivas. El PDI tiene 4 programas: Fortalecimiento organizativo, Titulación de Tierras, Producción Agropecuaria, Producción Artesanal. En septiembre de 2000, indígenas chiquitanos y ayoreos tomaron las instalaciones de la empresa del gasoducto en San Juan, para exigir el inmediato pago de la totalidad del PDI, que tenía retenido la compañía petrolera en una cuenta bancaria.*

biopiratería por una mísera donación de 6.000 US\$. En estos momentos Estados Unidos habrá patentado las propiedades de resistencia a la sequía y plagas de la planta. Las comunidades indígenas chiquitanas y ayoreas, que protegieron este singular ecosistema durante miles de años, recibirán a cambio sólo el polvo que levantan los jeeps de Enron cuando circulan por la extensa brecha del gasoducto. Estas comunidades han organizado un monitoreo activo de los impactos del gasoducto. En cada comunidad, un promotor ambiental realiza informes mensuales de los daños provocados por las obras. Durante la construcción se denunció la destrucción de caminos, dañar explotaciones ganaderas y contaminar cuerpos de agua, especialmente en la zona del pantanal. Por ejemplo, en la comunidad de Entreríos se contaminó el curso de agua que abastecía la comunidad. La única medida de mitigación realizada por la empresa, fue la colocación de un vistoso cartel que ponía: «Prohibido tomar agua».²²

Cuarta trampa: dinero público para subsidiar transnacionales

Los bolivianos pagan a precios internacionales sus propios hidrocarburos, Antes de la 1996, los precios se calculaban según los costos de producción nacional. Actualmente, los bolivianos, deben comprar el gas y petróleo a las transnacionales como si los importaran. Los costos de producción (incluido el transporte interno) por barril de petróleo no superan los siete dólares. Mientras, el Estado boliviano le reconoce a las petroleras el precio de 29 dólares por barril. Esto es una trampa sin fondo, Bolivia está subsidiando con dinero público a las empresas transnacionales en 22 dólares por barril.

REPSOL PARASITA LA ECONOMÍA BOLIVIANA

Será difícil demostrar las prácticas corruptas de Repsol-YPF en Bolivia, pero sí podemos afirmar que esta compañía se beneficia directa o indirectamente de las cuatro trampas de Goni:

Trampa 1: Se adjudicó la mitad de YPFB con el simple compromiso de invertir 268 millones de dólares, cantidad ri-

dícula teniendo en cuenta los yacimientos que obtuvo *gratis*.

Trampa 2: Con sólo la reclasificación de los tres campos más productivos (San Alberto, San Antonio y Margarita) Repsol-YPF está evadiendo anualmente cientos de millones de dólares.

Trampa 3: Aunque Repsol no se beneficia con la supremacía de Enron en la exportación de gas al Brasil, Andina SA (o sea Repsol) tiene preferencia en el llenado de los gasoductos Bolivia-Brasil y Cuiaba.

Trampa 4: Repsol-YPF con sus filiales Maxus, Pluspetrol y Andina SA son las más productivas de petróleo en el país, por tanto las principales beneficiadas del subsidio del petróleo.

Contrariamente al discurso tantas veces repetido por los modeladores macroeconómicos de América Latina (BM, FMI y otros) la entrada de inversiones extranjeras sólo vampirizan las débiles economías nacionales. Las movilizaciones populares del pueblo boliviano lograron paralizar (de momento) la exportación de gas a Estados Unidos. Desafortunadamente, la continuidad de Repsol en Bolivia conduce al país a una agonía económica sin solución, porque el Nuevo Ajuste Estructural creado en los noventa con las recetas de la banca multilateral han convertido al país en algo más parecido a una sucursal petrolera que un Estado nacional.

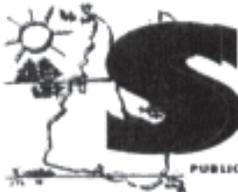
Campesinos e Indígenas de Bolivia ya demostraron con 80 muertos su negativa a las transnacionales del gas. ¿Estaremos los consumidores del Norte dispuestos a dejar de financiar diariamente estas empresas?

²² Organización Indígena Chiquitana-CEADES, Informes de Vigilancia Socio-Ambiental de los pueblos indígenas al Gasoducto Bolivia-Brasil Lateral Cuiabá, Santa Cruz, noviembre 1999 y marzo 2000.

DEBATES AMBIENTALES

Bolivia cuenta en la actualidad con cuatro gasoductos transfronterizos

Nombre gasoducto	Trayecto	Longitud	Zonas afectadas	Empresas
Gasoducto Bolivia Brasil	Santa Cruz-Puerto Suárez-Sao Paolo	3.000 Km	Parque Nacional Kaaya Parque Nacional Bañados de Otuquis	Enron, Shell, Petrobras
Gasoducto Cuiabá	San José de Chiquitos-San Matías -Cuiabá	425 Km	Bosque Seco Chiquitano	Enron, Shell, Petrobras
Gasoducto GASYRG	Yacuiba-Río Grande	500 Km	TCO Guaraní y Weenhayek	Transierra (Repsol YPf, Petrobras y Total)
Gasoducto YABOG	Yacuiba-Río Grande	500 Km	TCO Guaraní y Weenhayek	(Enron y Shell)



**REVISTA DEL
SUR**
PUBLICACION DE LA RED DEL TERCER MUNDO

Es una publicación mensual, con informes y análisis exclusivos, sobre los problemas que afectan a los pueblos del Tercer Mundo y sobre las alternativas diseñadas por estos mismos pueblos para superar la dependencia y la pobreza, explotar sus recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico del planeta.

**UNA VOZ PARA LOS
PUEBLOS DEL SUR**

**SUSCRÍBASE Y LÉALA TODO EL AÑO POR
SÓLO us 50 (cheque/giro a nombre del ITeM)**



INSTITUTO DEL TERCER MUNDO
Juan D. Jackson 1136
Montevideo 11200 - Uruguay
Tel: (5982) 496192 / Fax: (5982) 419222
Correo electrónico: redtm@chasque.apc.org